



FGR

**FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DÉCIMA SESIÓN
ORDINARIA 2025
18 DE MARZO DE 2025**



CONSIDERACIONES

Que el 10 de febrero de 2014 y el 29 de enero de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral" y el "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México", por medio de los cuales se reformaron, entre otros, el Apartado A del artículo 102 Constitucional y se estableció que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio;

Que el 20 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el primer párrafo del transitorio Décimo Sexto del primer Decreto citado;

Que el 20 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales", la cual tiene por objeto establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Institución, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación y demás personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, conforme a las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Que el 19 de junio de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, que tiene por objeto establecer las normas para la organización y el funcionamiento de la Fiscalía General de la República;

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, previendo que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad y que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros;

Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, establece en su artículo 24, fracción II, que



Que el artículo 64, párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, refieren que en cada sujeto obligado o responsable integrará un Comité de Transparencia;

Que el artículo 7, fracción X del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República establece como facultad genérica de las personas titulares de las unidades administrativas la relativa a suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean asignados por delegación o les correspondan por suplencia, y

Que el artículo 20, fracción XI, del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, prevé que la persona titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental tendrá entre otras, la facultad de presidir el Comité de Transparencia de la Institución, el cual se instalará mediante la disposición que dicha Unidad Administrativa emita en coordinación con la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos.

Que el Comité de Transparencia quedó formalmente constituido e instalado el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

[illegible]



INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.

En términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción X, y artículo 20, fracción XI, del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, en relación con el numeral segundo, fracción I del Acta de instalación del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República y en apego al artículo 64, párrafo cuarto, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Carlos Guerrero Ruiz

Miembro suplente del Titular de la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria, representante del área coordinadora de archivos

En términos de lo dispuesto en los artículos 4, párrafo tercero y 5, fracción XII, inciso c, y 184, fracción XXI, del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; numeral segundo, fracción II del Acta de instalación del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República, en relación con el numeral segundo, párrafo segundo del Acuerdo del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República por medio del cual se establecen sus atribuciones y funciones y en apego al artículo 64, párrafo cuarto, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

L. C. Sergio Agustín Taboada Cortina

Miembro suplente del Titular del Órgano Interno de Control

En términos de lo dispuesto en los artículos 11, fracción XIII, 93 fracción XIII y Transitorio Tercero de la Ley de la Fiscalía general de la República; los artículos 5, fracción XIII, inciso d, 203, 206, fracción IV y Décimo Sexto Transitorio del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; numeral SEGUNDO, fracción IV, inciso c) del A/OIC/001/2022; el numeral segundo, fracción III del Acta de instalación del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República, en relación con el numeral segundo, párrafo segundo del Acuerdo del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República por medio del cual se establecen sus atribuciones y funciones y en apego al artículo 64, párrafo cuarto, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.





SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Siendo las diecinueve horas con veintiséis minutos del dieciocho de marzo de dos mil veinticinco, la Secretaría Técnica del Comité, remitió a los integrantes del Comité de Transparencia la versión final de los asuntos que serían sometidos a su consideración, con las respectivas propuestas de determinación, correspondientes a su **Décima Sesión Ordinaria 2025** a celebrarse ese mismo día.

Derivado de lo anterior, tras un proceso de análisis a los asuntos, los integrantes del Comité de Transparencia emitieron su votación para cada uno de los casos, por lo que, contando con la votación de los tres integrantes de este Colegiado, la Secretaría Técnica del Comité, oficializó tomar nota de cada una de las resoluciones, haciendo del conocimiento de los enlaces de transparencia los acuerdos determinados por ese Órgano Colegiado, para así proceder a realizar la presente acta relativa a la sesión en cita.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

- I. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:
 - A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:
 - A.1. Folio 330024625000320
 - B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:
 - B.1. Folio 330024625000286
 - B.2. Folio 330024625000287
 - B.3. Folio 330024625000289
 - B.4. Folio 330024625000310
 - B.5. Folio 330024625000322
 - B.6. Folio 330024625000329
 - B.7. Folio 330024625000357
 - B.8. Folio 330024625000417
 - C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la información requerida:

Sin asuntos en la presente sesión.
 - D. Solicitudes en las que se analiza la ampliación de plazo de la información requerida:
 - D.1. Folio 330024625000293
 - D.2. Folio 330024625000337



- D.3. Folio 330024625000344
- D.4. Folio 330024625000400
- D.5. Folio 330024625000402
- D.6. Folio 330024625000403
- D.7. Folio 330024625000404
- D.8. Folio 330024625000405
- D.9. Folio 330024625000411
- D.10. Folio 330024625000412
- D.11. Folio 330024625000414
- D.12. Folio 330024625000416
- D.13. Folio 330024625000417
- D.14. Folio 330024625000418
- D.15. Folio 330024625000419
- D.16. Folio 330024625000420
- D.17. Folio 330024625000422
- D.18. Folio 330024625000423
- D.19. Folio 330024625000424
- D.20. Folio 330024625000426
- D.21. Folio 330024625000427
- D.22. Folio 330024625000428
- D.23. Folio 330024625000429
- D.24. Folio 330024625000430
- D.25. Folio 330024625000431
- D.26. Folio 330024625000434
- D.27. Folio 330024625000435
- D.28. Folio 330024625000437
- D.29. Folio 330024625000438
- D.30. Folio 330024625000439
- D.31. Folio 330024625000440
- D.32. Folio 330024625000442
- D.33. Folio 330024625000443
- D.34. Folio 330024625000444
- D.35. Folio 330024625000445
- D.36. Folio 330024625000447
- D.37. Folio 330024625000448
- D.38. Folio 330024625000450
- D.39. Folio 330024625000451
- D.40. Folio 330024625000456
- D.41. Folio 330024625000457
- D.42. Folio 330024625000464

E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:

- E.1. Folio de la solicitud 330024624002965 – RRA 620/25

F. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analizará la procedencia o improcedencia, la versión testada, inexistencia o entrega de los datos personales:



F.1. Folio de la solicitud 330024625000319

IV. Asuntos Generales.

PUNTO 1.

- Mensaje de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.

Área de redacción con líneas horizontales para el contenido del mensaje.



ABREVIATURAS

OF – Oficina del C. Fiscal General de la República.

FEAIN – Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales adscrita a la FECOC.

FEMDO – Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

FEMCC – Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

FEVIMTRA: Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas.

AIC – Agencia de Investigación Criminal

OM – Oficialía Mayor

UEAJ – Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CPEUM – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y Unidades Administrativas previstas en el presente Estatuto Orgánico o las que sean necesarias para el debido ejercicio de las atribuciones.

A handwritten signature in blue ink on lined paper. The signature consists of a stylized capital 'A' followed by a capital 'L'. The 'A' is formed by two intersecting diagonal lines, and the 'L' is a simple vertical line with a small horizontal base. The signature is written on a set of horizontal lines, with the 'A' spanning from the second line to the fourth line, and the 'L' spanning from the second line to the third line.





A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio de la solicitud 330024625000320

Síntesis	Carpeta de investigación FED/VER/VER/0003306/2021
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"Requiero versión pública de lo siguiente:

Solicito se me informe si la carpeta de investigación con número FED/VER/VER/0003306/2021 ya fue judicializada. En caso de que se haya judicializado, solicito conocer el número de causa penal que se le asignó y el Centro de Justicia Penal Federal al que fue turnado para su resolución. Además, solicito una versión pública de la carpeta de investigación." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la fracción 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20°, fracciones V, VI y VII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR y UETAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0095/2025:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad de votos determina **confirmar** la inexistencia de la **carpeta de investigación** solicitada, de conformidad con lo establecido en el **artículo 141** de la LFTAIP, en concatenación con el **criterio de interpretación del INAI 04/19** que a la letra señala que:

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de



inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Lo anterior, toda vez que la **FECOR** manifestó que posterior a efectuar una nueva búsqueda congruente y exhaustiva (**modo**) de la información en la totalidad de sus archivos físicos y electrónicos, bases de datos, libros de gobierno y cualquier otro registro en donde pudiera obrar la información requerida (**lugar**); hasta el seis de febrero del dos mil veinticinco, por ser la fecha de ingreso de la solicitud (**tiempo**), señaló no localizar la información requerida, toda vez que la **carpeta de investigación con número FED/VER/VER/0003306/2021** fue determinada; de ahí que resulte procedente declarar la inexistencia.

Área de texto con líneas punteadas para el desarrollo de la investigación.



B.1. Folio de la solicitud 330024625000286

La resolución para cada uno de los asuntos enlistados en el presente rubro se encuentra al final de la presente acta, signadas por los miembros del Comité.

[illegible]



B.2. Folio de la solicitud 330024625000287

La resolución para cada uno de los asuntos enlistados en el presente rubro se encuentra al final de la presente acta, signadas por los miembros del Comité.

Área reservada para resoluciones y firmas, con líneas de puntos horizontales.



B.3. Folio de la solicitud 330024625000289

Síntesis	Posibles investigaciones relacionadas con la desaparición de una persona física
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"1. ¿Se han realizado acciones de búsqueda en el caso de los siete policías federales y un civil de nombres Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villena y Víctor Hugo López Lorenzo quienes desaparecieron el 19 de noviembre de 2009 cuando se dirigían a una comisión en Ciudad Hidalgo, Michoacán?. Dicha información debe darse desde el momento de su desaparición a la fecha en que se realiza la presente solicitud. 2. En caso de que si se hayan realizado acciones de búsqueda enviar la versión pública del informe de las acciones de búsqueda implementadas y sus resultados obtenidos." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la fracción 11ª, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5ª, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20ª, fracciones V, VI y VII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH y UETAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0096/2025:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de **confidencialidad** del pronunciamiento institucional, respecto de afirmar o negar **la existencia o inexistencia de alguna investigación por la desaparición de una persona física identificada o identificable, como es el caso que nos ocupa**, toda vez que pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, que en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida, seguridad y salud, de conformidad con lo previsto en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP,



Por lo expuesto, resulta conveniente señalar el contenido del **artículo 113, fracción I**, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra establece:

"Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;
[...]"

Además, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de esta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

En complemento, el numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, disponen:

"Trigésimo octavo. Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:

I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las siguientes categorías:
[...]"

7. Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos.
[...]"

De lo expuesto, se desprende que **será considerada información clasificada como confidencial**, aquella que contenga **los datos personales de una persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación por desaparición se considera aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, e incluso de su de la familia o personas que tuvieron alguna relación directa con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida.

Al efecto, se debe considerar que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme los artículos 6 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y a la protección de sus datos personales y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, estableciendo lo siguiente:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
[...]"

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[...]"



"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación por desaparición, afectaría directamente a sus familiares o personas que tuvieron alguna relación directa.

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Dentro de ese orden de ideas, también el legislador previó mecanismos para salvaguardar la secrecía de las investigaciones en donde pudiera obrar la información solicitada, e inclusive previó una sanción para el servidor público que contravenga dicha disposición, sin que haya dado margen a la autoridad para la interpretación de la norma o que a la fecha exista disposición expresa por la cual se pueda realizar la entrega de la información solicitada, con el objeto de no solo garantizar el éxito de la investigación, sino también de:

1. Evitar poner en riesgo la vida, la integridad física o psicológica de las víctimas y victimas indirectas en términos de lo establecido en el artículo 20 apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales: 15, 106, 109 fracciones XXI y XXVI y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 4, 5, 22, penúltimo Párrafo, y 40, fracción III, de la Ley General de Víctimas.

2. Proteger derechos de terceros, los cuales han llegado a intervenir en los actos de investigación realizados por la Representación Social de la Federación; así, destaca que diversos **testigos** han depuesto ante la autoridad ministerial a fin de proporcionar información que ayude al esclarecimiento de los hechos y en cuyos depósitos aportaron información sensible relacionada con su vida privada, tal como lo es sus nombres, teléfonos, domicilios y circunstancias particulares relacionadas con su modo de vida, salud, identidad y personalidad; prerrogativas que han sido reconocidas en distintos instrumentos tanto nacionales como internacionales por formar parte del mínimo indispensable que los individuos requieren para la obtención de las metas que en lo particular se han fijado.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 20 [...]"

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

[...]

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.



El Ministerio Público **deberá garantizar la protección de las víctimas**, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; [...]

Código Nacional de Procedimientos Penales

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, así mismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Artículo 106. Reserva sobre la Identidad

En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la **información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal** o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste.

Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos será sancionada por la legislación aplicable.

En los casos de personas sustraídas de la justicia se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia.

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

En los procedimientos previstos por este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

[...]

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables.

[...]

XXVI. **Al resguardo de su identidad y demás datos personales** cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección salvaguardando en todos los casos los derechos de la defensa.

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

Los registros de la investigación, así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

Para los efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente podrá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años contando a partir de que dicha resolución haya quedado firme. (Sic)

Ley General de Víctimas

"Artículo 4.- Se denominarán **víctimas directas aquellas personas físicas** que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta



en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o violación de derechos.

"Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

[...]

Máxima protección. -

[...]

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

[...]

"Artículo 22.

[...]

Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

[...]

"Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

[...]

En ese contexto, **afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna investigación por la desaparición de una persona física identificada o identificable**, corresponde a un dato identificador, mismo que permite la individualización de casos exponiendo diversos datos personales de tal manera que se pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, que en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida.

Es de resaltarse que la integridad y la seguridad de las víctimas indirectas u ofendidos, puede ser vulnerada; por lo que resulta como prioridad salvaguardar sus derechos humanos, por lo tanto es de especial prevalencia y protección, pues las consecuencias de la individualización de casos y

los potenciales riesgos que esto implica son sumamente relevantes, ya que de materializarse pueden propiciar la revictimización, la comisión de nuevos delitos lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que dichos datos son absolutamente reservados.

Además, se estima que como autoridad es primordial garantizar el cumplimiento de los requisitos pertinentes para proteger los datos personales, para así proteger la vida del privada de las víctimas, con un enfoque humanitario, brindando la máxima protección, adoptando y aplicando las medidas que garanticen el trato digno, ello contribuyendo a la no revictimización, resguardo la integridad personal y seguridad de las víctimas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos de lo contrario se ponen en riesgo bienes de mayor peso; lo anteriormente manifestado, se funda en lo que establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable."

Por lo que se solicita que considere que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme al artículo 6 de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, por lo que inclusive el artículo 6° Apartado A, fracción II Constitucional prevé expresamente:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

- I. ...
II. **La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.**

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afecta la *privacidad, intimidad y datos personales de las personas*, a saber:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad.



para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contrarie otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que **en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.** Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política. Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, **en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.¹**

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

¹ Tesis Aislada, I,3o.C.244/G, Tomo: XIV, septiembre de 2001, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado Circuito.



El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.²

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los **finés constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho**, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de **información confidencial** y el de **información reservada**. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, **referente a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.³

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

² Tesis Aislada, P. LX/2000, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Pleno.

³ Tesis Aislada, 1a. VII/2012, Tomo 1, febrero de 2012, Décima Época, Primera Sala.



Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Siendo por todo expuesto y fundado, entre las principales razones por las que el artículo **218 del Código Nacional de Procedimientos Penales** prevé **la reserva de la investigación** e inclusive ha sido avalada por el Alto Tribunal, al estar conforme lo previsto por los artículos 6° Apartado A, fracción II y 16 Constitucional, que disponen que **la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de las personas está protegida** en los términos legalmente previstos.

Por lo que, al efecto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la **confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona**, como en el caso lo es, de las personas de quien se solicita información.



B.4. Folio de la solicitud 330024625000310

Síntesis	Información relacionada con posibles investigaciones en contra del suscrito
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"C. Agustín (...)"

... vengo ante esta H. dependencia para saber si hay alguna denuncia en mi contra con los datos generales que a continuación le proporciono:

Nombre Completo: Agustín Mendoza Jiménez

CURP: (...)

Esto con el fin de que se busque en todos los registros correspondientes a ver si hay alguna denuncia que me vincule como calidad de IMPUTADO ..."

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la fracción 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20°, fracciones V, VI y VII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDO, FECOR, FISEL, FECOC y FEMDH.**

ACUERDO

CT/ACDO/0097/2025:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de **reserva** del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna carpeta o línea de investigación en donde pudiese estar inmerso el peticionario, ello en términos del **artículo 110, fracción VII** de la Ley de la materia, hasta por un periodo de cinco años.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

"VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;"

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo sexto** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

"Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.**

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. *La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;*
- II. *Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y*
- III. *Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal".*

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que, al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, **se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba** que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia de dichos procedimientos, se traduce en que **el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona**, y con ello **se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.**

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información **supera el interés público general**, ya que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que **se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.**
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, **no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso**, en razón de la importancia del interés jurídico



tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso se encuentra sujeto a **limitaciones por razones de interés público** previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Fiscalía en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta **proporcional** el atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación con el interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a la información; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

En relación con lo expuesto, es trascendental traer a colación lo dictado en las siguientes tesis jurisprudenciales emitidas por Tribunales Colegiados, donde principalmente se establece que **no**

se causa afectación a las personas por la integración de una carpeta de investigación, y que su derecho de obtener acceso a los registros de la investigación procede únicamente a partir de determinados momentos, a saber:

"INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO.

Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, **el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 50, fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular.**"⁴

"ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL.

El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues **ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial.** Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; **lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que**

⁴ Tesis aislada, (X Región) 20.1 P (10a.), Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito.



podieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso- hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación."⁵

"CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO.

De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 50., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, **su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra**, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, **entorpecería la facultad del Ministerio Público** de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión."⁶

"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO PARA IMPUGNAR LA NEGATIVA DE ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN RESPECTIVA -EN SU ETAPA INICIAL- [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA I.90.P.172 P (10a.)].

Hechos: Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada I.90.P.172 P (10a.), sostuvo que si el quejoso no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público como imputado, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él y/o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, aun cuando aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y aquella se está integrando. En contextos como el descrito, este órgano sostenía que el promovente no tenía interés jurídico ni legítimo para instar el juicio constitucional, pues no resentía una afectación en su esfera jurídica.

Criterio jurídico: De una nueva reflexión, este Tribunal Colegiado de Circuito abandona la postura sostenida pues, con base en el desarrollo jurisprudencial actual, se advierte que una pretensión de la naturaleza descrita debe ser analizada en un estudio de fondo del asunto, en el cual, **la autoridad de amparo tendrá que cerciorarse o descartar que el promovente se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el tercer párrafo del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales**, para determinar la reserva -o no- de los actos de investigación. Las hipótesis de verificación se actualizan cuando: i) el imputado se encuentre detenido; ii) el promovente sea citado a comparecer con la calidad de imputado; o, iii) la persona sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista.

Justificación: Lo anterior, porque el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2018, de la que derivó la tesis de jurisprudencia PC.I.P. J/50 P (10a.), de título y subtítulo: **"INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE**

⁵ Registro digital: 2015192 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: I.70.P.92 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1821

⁶ Registro digital: 2015500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común. Penal Tesis: XXVII.30.48 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 1947



OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA.", determinó que tratándose de asuntos como el descrito, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo (falta de interés) y, por tanto, los órganos de amparo tienen la obligación de realizar un estudio de fondo con las características descritas; de ahí que esta evaluación no pueda llevarse a cabo al estudiar la procedencia del juicio.⁷

"DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

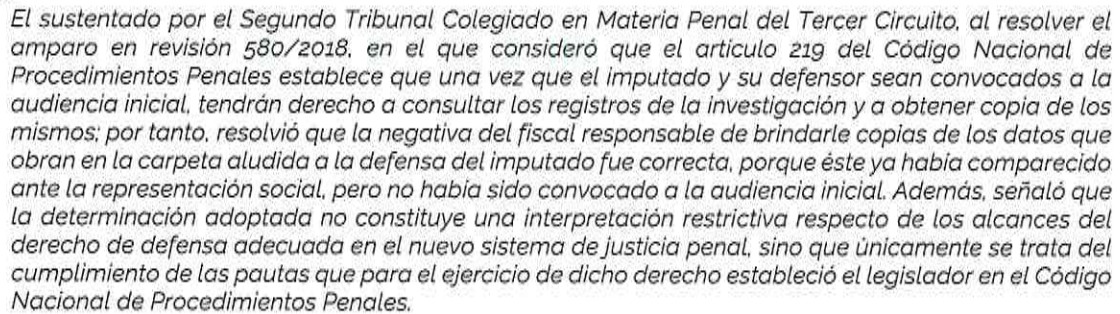
Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido.

Contradicción de tesis 149/2019. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, 12 de junio de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Horacio Vite Torres.

Tesis y criterio contendientes:

El emitido por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 17/2018, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/53 P (10a.), de título y subtítulo: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de febrero de 2019 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Tomo II, febrero de 2019, página 1155, con número de registro digital: 2019292.

⁷ Registro digital: 2024070 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: I.90.P.28 P (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2993



Esta tesis se publicó el viernes 25 de octubre de 2019 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.⁸

29



B.5. Folio de la solicitud 330024625000322

La resolución para cada uno de los asuntos enlistados en el presente rubro se encuentra al final de la presente acta, signadas por los miembros del Comité.

Área con líneas punteadas para la resolución de los asuntos enlistados en el presente rubro.



B.6. Folio de la solicitud 330024625000329

Síntesis	Posibles investigaciones relacionadas con el homicidio de una persona física
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Mi solicitud va dirigida para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que está adscrita a la FEMDH y pertenece a la FGR: 1. ¿Cuántas investigaciones tienen (abiertas o ya judicializadas) de mujeres periodistas asesinadas? 2. ¿En cuántas de ellas el delito está encuadrado como feminicidio? 3. ¿Cómo es la metodología que utilizan para encuadrar el tipo como homicidio o feminicidio en mujeres periodistas? 4. ¿Cómo aplican la perspectiva de género en los casos de muerte violenta cometida hacia mujeres periodistas? 5. ¿La FEADLE atrajo el caso de Anabel Flores, periodista asesinada en febrero de 2016 en Veracruz?" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la fracción 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20°, fracciones V, VI y VII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y FEMDH.**

ACUERDO

CT/ACDO/0098/2025:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de **confidencialidad** del pronunciamiento institucional, respecto de afirmar o negar **la existencia o inexistencia de alguna investigación derivada del homicidio de una persona física identificada o identificable, como es el caso que nos ocupa**, toda vez que pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, que en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida, seguridad y salud, de conformidad con lo previsto en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP; aunado a que, emitir



pronunciamiento alguno, podría afectar la **dignidad, historia, vida privada, honor, memoria y reputación de la persona fallecida** y la de sus familiares.

Por lo expuesto, resulta conveniente señalar el contenido del **artículo 113, fracción I**, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra establece:

"Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; [...]"

Además, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de esta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

En complemento, el numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, disponen:

*"Trigésimo octavo. Se considera susceptible de clasificarse como **información confidencial**:*

I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las siguientes categorías:

7. Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos. [...]"

De lo expuesto, se desprende que **será considerada información clasificada como confidencial**, aquella que contenga **los datos personales de una persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación por desaparición se considera aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, e incluso de su de la familia o personas que tuvieron alguna relación directa con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida.

Al efecto, se debe considerar que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme los artículos 6 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y a la protección de sus datos personales y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, estableciendo lo siguiente:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. [...]"



II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[...]"

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación por desaparición, afectaría directamente a sus familiares o personas que tuvieron alguna relación directa.

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Dentro de ese orden de ideas, también el legislador previó mecanismos para salvaguardar la secrecía de las investigaciones en donde pudiera obrar la información solicitada, e inclusive previó una sanción para el servidor público que contravenga dicha disposición, sin que haya dado margen a la autoridad para la interpretación de la norma o que a la fecha exista disposición expresa por la cual se pueda realizar la entrega de la información solicitada, con el objeto de no solo garantizar el éxito de la investigación, sino también de:

1. Evitar poner en riesgo la vida, la integridad física o psicológica de las víctimas y víctimas indirectas en términos de lo establecido en el artículo **20 apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, así como los numerales: 15, 106, 109 fracciones XXI y XXVI y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 4, 5, 22, penúltimo Párrafo, y 40, fracción III, de la Ley General de Víctimas.

2. Proteger derechos de terceros, los cuales han llegado a intervenir en los actos de investigación realizados por la Representación Social de la Federación; así, destaca que diversos **testigos** han depuesto ante la autoridad ministerial a fin de proporcionar información que ayude al esclarecimiento de los hechos y en cuyos depósitos aportaron información sensible relacionada con su vida privada, tal como lo es sus nombres, teléfonos, domicilios y circunstancias particulares relacionadas con su modo de vida, salud, identidad y personalidad; prerrogativas que han sido reconocidas en distintos instrumentos tanto nacionales como internacionales por formar parte del mínimo indispensable que los individuos requieren para la obtención de las metas que en lo particular se han fijado.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 20 [...]

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

[...]



V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea **necesario para su protección**, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público **deberá garantizar la protección de las víctimas**, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; [...]

Código Nacional de Procedimientos Penales

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, así mismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Artículo 106. Reserva sobre la Identidad

En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la **información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal** o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste.

Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos será sancionada por la legislación aplicable.

En los casos de personas sustraídas de la justicia se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia.

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

En los procedimientos previstos por este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

[...]

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables.

[...]

XXVI. **Al resguardo de su identidad y demás datos personales** cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección salvaguardando en todos los casos los derechos de la defensa.

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

Los registros de la investigación, así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

Para los efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente podrá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años contando a partir de que dicha resolución haya quedado firme. (Sic)



Ley General de Víctimas

"Artículo 4.- Se denominarán **víctimas directas aquellas personas físicas** que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.

Son **víctimas indirectas los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.**

Son **víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.**

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o violación de derechos.

"Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

[...]

Máxima protección. -

[...]

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

[...]

"Artículo 22.

[...]

Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

[...]

"Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, **adoptarán con carácter inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.**

[...]

En ese contexto, **afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna investigación por la desaparición de una persona física identificada o identificable**, corresponde a un dato identificador, mismo que permite la individualización de casos exponiendo diversos datos personales de tal manera que se pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, que en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida.

Es de resaltarse que la integridad y la seguridad de las víctimas indirectas u ofendidos, puede ser vulnerada; por lo que resulta como prioridad salvaguardar sus derechos humanos, por lo tanto es de especial prevalencia y protección, pues las consecuencias de la individualización de casos y los potenciales riesgos que esto implica son sumamente relevantes, ya que de materializarse pueden propiciar la revictimización, la comisión de nuevos delitos lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que dichos datos son absolutamente reservados.

Además, se estima que como autoridad es primordial garantizar el cumplimiento de los requisitos pertinentes para proteger los datos personales, para así proteger la vida del privada de las víctimas, con un enfoque humanitario, brindando la máxima protección, adoptando y aplicando las medidas que garanticen el trato digno, ello contribuyendo a la no revictimización, resguardo la integridad personal y seguridad de las víctimas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos de lo contrario se ponen en riesgo bienes de mayor peso; lo anteriormente manifestado, se funda en lo que establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad **de cualquier persona que intervenga en él**, asimismo se protegerá la información que se refiere a la **vida privada y los datos personales**, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable."*

Por lo que se solicita que considere que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme al artículo 6 de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, por lo que inclusive el artículo 6º Apartado A, fracción II Constitucional prevé expresamente:

*"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, **sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley**. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

""

III.

IV.

""
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afecta *la privacidad, intimidad y datos personales de las personas*, a saber:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. *El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad*



de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contrarie otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que **en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.** Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política. Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, **en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.⁹**

⁹ Tesis Aislada, I.3o.C.244 C, Tomo: XIV, septiembre de 2001, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado Circuito.

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.¹⁰

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los **finés constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho**, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de **información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, **referente a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.¹¹

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

¹⁰ Tesis Aislada, P. LX/2000, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Pleno.

¹¹ Tesis Aislada, 1a. VII/2012, Tomo 1, febrero de 2012, Décima Época, Primera Sala.



Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

- 1.- **Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.**
- 2.- **Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.**
- 3.- **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

3. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

Siendo por todo expuesto y fundado, entre las principales razones por las que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la reserva de la investigación e inclusive ha sido avalada por el Alto Tribunal, al estar conforme lo previsto por los artículos 6° Apartado A, fracción II y 16 Constitucional, que disponen que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de las personas está protegida en los términos legalmente previstos.

Por lo que, al efecto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la **confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona**, como en el caso lo es, de las personas de quien se solicita información.



B.7. Folio de la solicitud 330024625000357

Síntesis	Posibles investigaciones relacionadas con la desaparición de una persona física
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito un informe detallado sobre todas las búsquedas realizadas en relación con el caso de Claudia Uruchurtu Cruz. Dicho informe deberá contener la siguiente información en formato de tabla: Fecha de cada búsqueda realizada. Zona o lugar de la búsqueda con coordenadas geográficas. Instituciones o dependencias que participaron. Métodos empleados en la búsqueda. Recursos utilizados. Hallazgos, en su versión pública. Solicito que la información sea entregada en un formato digital editable, como Excel o CSV o DOC, para facilitar su análisis." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la fracción 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20°, fracciones V, VI y VII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMDH y UETAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0099/2025:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de **confidencialidad** del pronunciamiento institucional, respecto de afirmar o negar **la existencia o inexistencia de alguna investigación por la desaparición de una persona física identificada o identificable, como es el caso que nos ocupa**, toda vez que pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, que en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida, seguridad y salud, de conformidad con lo previsto en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP,



Por lo expuesto, resulta conveniente señalar el contenido del **artículo 113, fracción I**, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra establece:

"Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

[...]"

Además, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de esta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

En complemento, el numeral Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, disponen:

"Trigésimo octavo. Se considera susceptible de clasificarse como información confidencial:

I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las siguientes categorías:

[...]"

7. Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos.

[...]"

De lo expuesto, se desprende que **será considerada información clasificada como confidencial**, aquella que contenga **los datos personales de una persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación por desaparición se considera aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, e incluso de su de la familia o personas que tuvieron alguna relación directa con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida.

Al efecto, se debe considerar que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme los artículos 6 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y a la protección de sus datos personales y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, estableciendo lo siguiente:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]"

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[...]"

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación por desaparición, afectaría directamente a sus familiares o personas que tuvieron alguna relación directa.

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Dentro de ese orden de ideas, también el legislador previó mecanismos para salvaguardar la secrecía de las investigaciones en donde pudiera obrar la información solicitada, e inclusive previó una sanción para el servidor público que contravenga dicha disposición, sin que haya dado margen a la autoridad para la interpretación de la norma o que a la fecha exista disposición expresa por la cual se pueda realizar la entrega de la información solicitada, con el objeto de no solo garantizar el éxito de la investigación, sino también de:

1. Evitar poner en riesgo la vida, la integridad física o psicológica de las víctimas y victimas indirectas en términos de lo establecido en el artículo **20 apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, así como los numerales: 15, 106, 109 fracciones XXI y XXVI y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 4, 5, 22, penúltimo Párrafo, y 40, fracción III, de la Ley General de Víctimas.

2. **Proteger derechos de terceros**, los cuales han llegado a intervenir en los actos de investigación realizados por la Representación Social de la Federación; así, destaca que diversos **testigos** han depuesto ante la autoridad ministerial a fin de proporcionar información que ayude al esclarecimiento de los hechos y en cuyos depósitos aportaron información sensible relacionada con su vida privada, tal como lo es sus nombres, teléfonos, domicilios y circunstancias particulares relacionadas con su modo de vida, salud, identidad y personalidad, prerrogativas que han sido reconocidas en distintos instrumentos tanto nacionales como internacionales por formar parte del mínimo indispensable que los individuos requieren para la obtención de las metas que en lo particular se han fijado.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 20 [...]

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

[...]

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.



El Ministerio Público **deberá garantizar la protección de las víctimas**, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; [...]

Código Nacional de Procedimientos Penales

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, así mismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Artículo 106. Reserva sobre la Identidad

En ningún caso se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la **información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal** o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste.

Toda violación al deber de reserva por parte de los servidores públicos será sancionada por la legislación aplicable.

En los casos de personas sustraídas de la justicia se admitirá la publicación de los datos que permitan la identificación del imputado para ejecutar la orden judicial de aprehensión o de comparecencia.

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

En los procedimientos previstos por este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:

[...]

XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables.

[...]

XXVI. **Al resguardo de su identidad y demás datos personales** cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario para su protección salvaguardando en todos los casos los derechos de la defensa.

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

Los registros de la investigación, así como todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

Para los efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente podrá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años contando a partir de que dicha resolución haya quedado firme. (Sic)

Ley General de Víctimas

"Artículo 4.- Se denominarán **víctimas directas aquellas personas físicas** que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta

en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o violación de derechos.

"Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

[...]

Máxima protección. -

[...]

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas,

[...]

"Artículo 22.

[...]

Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

[...]

"Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, **adoptarán con carácter inmediato las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.**

[...]

En ese contexto, **afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna investigación por la desaparición de una persona física identificada o identificable**, corresponde a un dato identificador, mismo que permite la individualización de casos exponiendo diversos datos personales de tal manera que se pondría en peligro la identidad de las víctimas indirectas u ofendidos, que en la mayoría de los casos se trata de la familia o personas que tuvieron alguna relación con la víctima directa; quienes derivado de la comisión de un delito, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a poner en peligro su vida.

Es de resaltarse que la integridad y la seguridad de las víctimas indirectas u ofendidos, puede ser vulnerada; por lo que resulta como prioridad salvaguardar sus derechos humanos, por lo tanto es de especial prevalencia y protección, pues las consecuencias de la individualización de casos y



los potenciales riesgos que esto implica son sumamente relevantes, ya que de materializarse pueden propiciar la revictimización, la comisión de nuevos delitos lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que dichos datos son absolutamente reservados.

Además, se estima que como autoridad es primordial garantizar el cumplimiento de los requisitos pertinentes para proteger los datos personales, para así proteger la vida del privada de las víctimas, con un enfoque humanitario, brindando la máxima protección, adoptando y aplicando las medidas que garanticen el trato digno, ello contribuyendo a la no revictimización, resguardo la integridad personal y seguridad de las víctimas, a fin de salvaguardar sus derechos humanos de lo contrario se ponen en riesgo bienes de mayor peso; lo anteriormente manifestado, se funda en lo que establece el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable."

Por lo que se solicita que considere que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme al artículo 6 de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, por lo que inclusive el artículo 6º Apartado A, fracción II Constitucional prevé expresamente:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

...

V.

VI.

...

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afecta la *privacidad, intimidad y datos personales de las personas*, a saber:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad

para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contrarie otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que **en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.** Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política. Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, **en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.**¹²

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

¹² Tesis Aislada, I.3o.C.244 C, Tomo: XIV, septiembre de 2001, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado Circuito.



El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.¹³

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que **el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales**. Dichas fracciones sólo enuncian los **finés constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho**, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de **información confidencial** y el de **información reservada**. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, **referente a la vida privada y los datos personales**, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.¹⁴

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

¹³ Tesis Aislada, P. LX/2000, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Pleno.

¹⁴ Tesis Aislada, 1a. VII/2012, Tomo 1, febrero de 2012, Décima Época, Primera Sala.



Artículo 12. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.**

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- **Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.**
- 2.- **Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.**
- 3.- **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

Artículo 17.

5. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.**
6. **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

Siendo por todo expuesto y fundado, entre las principales razones por las que el artículo **218 del Código Nacional de Procedimientos Penales** prevé **la reserva de la investigación** e inclusive ha sido avalada por el Alto Tribunal, al estar conforme lo previsto por los artículos 6° Apartado A, fracción II y 16 Constitucional, que disponen que **la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de las personas está protegida** en los términos legalmente previstos.

Por lo que, al efecto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la **confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona**, como en el caso lo es, de las personas de quien se solicita información.



B.8. Folio de la solicitud 330024625000417

Síntesis	Posibles investigaciones en contra de terceros
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Solicito conocer toda queja o denuncia que haya sido presentada contra la empresa Big Force Academy, Academia de Capacitación Agrícola Mexicana. Solicito conocer por año en que se recibió la queja o denuncia, municipio, estado, nomenclatura del expediente y estatus del mismo. Del periodo comprendido de 2022 a la fecha de la presente solicitud." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la fracción 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20°, fracciones V, VI y VII del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOC, FEMDH, FECOR y FEMDO.**

ACUERDO

CT/ACDO/0100/2025:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de confidencialidad del pronunciamiento institucional, respecto de afirmar o negar alguna línea de investigación contra **la persona moral** señalada en la solicitud, en términos del **artículo 113, fracción III** de la LFTAIP.

Toda vez que, la **Fiscalía General de la República se encuentra jurídicamente imposibilitada para pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la información solicitada**, toda vez que se actualiza la hipótesis de información clasificada como **confidencial**, en términos de lo dispuesto en el **artículo 113, fracción III** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de los numerales **Trigésimo octavo y Cuadragésimo** de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas.



En virtud de ello, se advierte que este sujeto obligado se encuentra imposibilitado jurídicamente para **afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna denuncia presentada por una persona física o moral identificada o identificable, como es el caso que nos ocupa, toda vez que se estaría atentando contra su intimidad, honor, vida privada, buen nombre, seguridad.**

Por lo expuesto, resulta conveniente señalar el contenido del **artículo 113, fracción III**, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra establecen:

"Artículo 113. **Se considera información confidencial:**

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

[...]

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales"

Además, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de esta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

En complemento, los numerales Trigésimo octavo y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, disponen:

"Trigésimo octavo. Se considera susceptible de clasificarse como **información confidencial:**

I. Los datos personales, entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las siguientes categorías:

[...]

7. Datos sobre situación jurídica o legal: La información relativa a una **persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento** administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, **penal**, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos. [...]

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y [...]

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquellos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

- I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
- II. **La que comprenda hechos y actos de carácter** económico, contable, **jurídico** o administrativo relativos a una persona, que únicamente le incumba a su titular, por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea."

Al respecto, se desprende que **será considerada información clasificada como confidencial**, aquella que contenga **los datos personales de una persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a



temporalidad alguna y a la que **sólo podrán tener acceso los titulares de la información** o sus representantes legales.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna **denuncia** afectaría directamente **su intimidad, privacidad y datos personales** de las personas en comento.

Al efecto, se debe considerar que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme los artículos 1°, 6°, 16° y 20 apartado B, fracción I de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y a la protección de sus datos personales y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, estableciendo lo siguiente:

***"Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, **sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.** El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

[...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[...]"

***"Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.*

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

***"Artículo 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

..."

***B.** De los derechos de toda persona imputada:*

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; ..."

Aunado a esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su **artículo 15**, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales cuando participe como parte en el procedimiento penal, a saber:

"Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable."

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información

tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta la privacidad, intimidad y datos personales de las personas, a saber:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contrarie otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que **en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público**. Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política. Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, **en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es**



consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.¹⁵

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.¹⁶

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL).

*Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de **información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren*

¹⁵ Tesis Aislada, I.3o.C.244 C, Tomo: XIV, septiembre de 2001, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado Circuito.

¹⁶ Tesis Aislada, P. LX/2000, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Pleno.



tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad** o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o comercialización si se obtiene el consentimiento expreso de la persona a que haga referencia la información.¹⁷

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

Artículo 12. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.** Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- **Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra** y al reconocimiento de su dignidad.
- 2.- **Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.**
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

Artículo 17.

7. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.**
8. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión **628/2008**, en el sentido de que hay información que concierne al quehacer de una **persona moral** y que, guardadas todas las proporciones, es para esa persona, lo que el dato personal es para la persona física.

En tal tesitura, se trae a colación los siguientes criterios emitidos por el Supremo Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación:

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD.¹⁸

El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el **derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas.** En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o

¹⁷ Tesis Aislada, 1a. VII/2012, Tomo I, febrero de 2012, Décima Época, Primera Sala.

¹⁸ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 3, febrero de 2014, Pleno, p. 274, Tesis: P. II/2014, Registro: 2005522.



menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, **los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales**, comprenden aquellos **documentos** e información que les son inherentes, **que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros**, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, **la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales**, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número II/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Décima Época

2000082. 1a. XXI/2011 (10a.). Primera Sala.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905.

DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Toda persona física es titular del derecho al honor, pues el reconocimiento de éste es una consecuencia de la afirmación de la dignidad humana. Sin embargo, el caso de las personas jurídicas o morales presenta mayores dificultades, toda vez que de ellas no es posible predicar dicha dignidad como fundamento de un eventual derecho al honor. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario utilizar la distinción entre el honor en sentido subjetivo y objetivo a fin de resolver este problema. Resulta difícil poder predicar el derecho al honor en sentido subjetivo de las personas morales, pues carecen de sentimientos y resultaría complicado hablar de una concepción que ellas tengan de sí mismas. Por el contrario, en lo relativo a su sentido objetivo, considerando el honor como la buena reputación o la buena fama, parece no sólo lógico sino necesario sostener que el derecho al honor no es exclusivo de las personas físicas, puesto que las personas jurídicas evidentemente gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad. En primer término, es necesario tomar en cuenta que las personas denominadas jurídicas o morales son creadas por personas físicas para la consecución de fines determinados, que de otra forma no se podrían alcanzar, de modo que constituyen un instrumento al servicio de los intereses de las personas que las crearon. En segundo lugar, debemos considerar que los entes colectivos creados son la consecuencia del ejercicio previo de otros derechos, como la libertad de asociación, y que el pleno ejercicio de este derecho requiere que la organización creada tenga suficientemente garantizados aquellos derechos fundamentales que sean necesarios para la consecución de los fines propuestos. En consecuencia, es posible afirmar que las personas jurídicas deben ser titulares de aquellos derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la referida finalidad. Es en este ámbito que se encuentra el derecho al honor, pues él desmerecimiento en la consideración ajena sufrida por determinada persona jurídica, conllevará, sin duda, la imposibilidad de que ésta pueda desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la realización de su objeto social o, al menos, una afectación ilegítima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, las personas jurídicas también pueden ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando otra persona la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.

Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.



2000082. 1a. XXI/2011 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905.

Siendo por todo expuesto y fundado, entre las principales razones por las que el artículo **218 del Código Nacional de Procedimientos Penales** prevé **la reserva de la investigación** e inclusive ha sido avalada por el Alto Tribunal, al estar conforme lo previsto por los artículos 6° Apartado A, fracción II y 16 Constitucional, que disponen que **la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de las personas está protegida** en los términos legalmente previstos. Por lo que, al efecto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la **confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona**, como en el caso lo es, de las personas de quien se solicita información.



D. Solicitudes en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:

CT/ACDO/0101/2025:

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP.

- D.1. Folio 330024625000293
- D.2. Folio 330024625000337
- D.3. Folio 330024625000344
- D.4. Folio 330024625000400
- D.5. Folio 330024625000402
- D.6. Folio 330024625000403
- D.7. Folio 330024625000404
- D.8. Folio 330024625000405
- D.9. Folio 330024625000411
- D.10. Folio 330024625000412
- D.11. Folio 330024625000414
- D.12. Folio 330024625000416
- D.13. Folio 330024625000417
- D.14. Folio 330024625000418
- D.15. Folio 330024625000419
- D.16. Folio 330024625000420
- D.17. Folio 330024625000422
- D.18. Folio 330024625000423
- D.19. Folio 330024625000424
- D.20. Folio 330024625000426
- D.21. Folio 330024625000427
- D.22. Folio 330024625000428
- D.23. Folio 330024625000429
- D.24. Folio 330024625000430
- D.25. Folio 330024625000431
- D.26. Folio 330024625000434
- D.27. Folio 330024625000435
- D.28. Folio 330024625000437
- D.29. Folio 330024625000438
- D.30. Folio 330024625000439
- D.31. Folio 330024625000440
- D.32. Folio 330024625000442
- D.33. Folio 330024625000443
- D.34. Folio 330024625000444
- D.35. Folio 330024625000445
- D.36. Folio 330024625000447
- D.37. Folio 330024625000448
- D.38. Folio 330024625000450
- D.39. Folio 330024625000451
- D.40. Folio 330024625000456



D.41. Folio 330024625000457

D.42 Folio 330024625000464

Motivos que se expresan en el **Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta** que se despliega en la siguiente página.

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que, dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta

DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Folio 330024625000293 Fecha de notificación de prórroga 18/03/2025 Se solicita información acerca de las diligencias realizadas durante los años 2023 y 2024 por el sujeto obligado en el poblado de Santa Anita, en el Municipio de Tlaquepaque Jalisco, en el que haya sido necesario realizar excavaciones dentro de cualquier finca ubicada en la misma población, indicándose, datos precisos de la carpeta de investigación, o en su caso número de expediente, así como los datos de cualquier otra autoridad que haya participado en las mismas diligencias. En el caso de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de la Republica, indiquen la agencia que ordenó y participó en el desarrolló las diligencias, así como los datos de la carpeta de investigación respectiva.	Solicitada por análisis en la UTAG
Folio 330024625000337 Fecha de notificación de prórroga 11/03/2025 De conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la CPEUM, solicito el procedimiento para poder ingresar mi curriculum como policía ministerial de la CDMX con la finalidad de aplicar para un puesto similar de grado federal.	Solicitada por análisis en la UTAG
Folio 330024625000344 Fecha de notificación de prórroga 11/03/2025 Solicito la trayectoria de José Ignacio Valencia en su institución y ¿De que fecha a que fecha fue Juez en el distrito de Xicotepec de Juárez?=-	Solicitada por análisis en la UTAG
Folio 330024625000400 Fecha de notificación de prórroga 18/03/2025 Quisiera copia digitalizada del expediente y/o carpeta de investigación referente al atentado que sufrió Eugenio Garza Sada el 17 de septiembre de 1973.	Solicitada por análisis en la UTAG
Folio 330024625000402 Fecha de notificación de prórroga 18/03/2025 De conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4 y 6 de la	Solicitada por análisis en la UTAG



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de conformidad con el Registro Nacional de Información Penitenciaria, se solicita de la manera más atenta que se respondan a las siguientes preguntas:</p> <p>1. Que se informe cuantas personas se encuentran privadas de la libertad por el delito de aborto doloso en términos de artículo 330 del Código Penal Federal;</p> <p>a. Del número de personas privadas de la libertad por el delito de aborto, solicito se señale lo siguiente;</p> <p>i. Edad de la persona privada de la libertad;</p> <p>ii. Sexo de la persona privada de la libertad</p> <p>iii. Estado de la Republica donde se encuentra la persona privada de su libertad</p>	
<p>Folio 330024625000403 Fecha de notificación de prórroga 18/03/2025 Requiero conocer cuántas denuncias ha presentado ante cualquier autoridad algún titular o miembro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, en contra de la administración de la LXV legislatura del Senado de la República por irregularidades o actos de corrupción en contratos públicos; particularmente dos; uno por la administración de archivos del Senado por parte de la empresa Full Services de México, y otro por la instalación de elevadores en el Senado por parte de la empresa Grupo PIASA, ambos celebrados durante la anterior legislatura, cuando Ricardo Monreal era presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. La petición que en este momento realizo, apela a los señalamientos por parte del actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, contra el actual coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, mismos que se realizaron el 13 de diciembre de 2024, tal como lo recoge la siguiente nota periodística: https://24-horas.mx/image-gallery/acusa-adan-augusto-negocitos-en-senado-durante-dominio-de-monreal/. Esta solicitud de información también se da en consecuencia a las declaraciones posteriores de Adán Augusto López del 4 de febrero de 2025, donde invita a un reportero a revisar la existencia de estas denuncias en las instancias correspondientes, tal como lo informa la siguiente nota periodística: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/adan-augusto-se-rehusa-a-aclarar-si-hizo-denuncias-contra-monreal-pide-a-periodistas-investigar-en-la-fiscalia/. Como parte de esta solicitud se recuerda que, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia, no se podrá invocar la reserva de información cuando los hechos registrados tengan relación con presuntos actos de corrupción.</p> <p>https://www.eluniversal.com.mx/nacion/adan-augusto-se-rehusa-a-aclarar-si-hizo-denuncias-contra-monreal-pide-a-</p>	<p>Solicitada por análisis en la UETAG</p>



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>periodistas-investigar-en-la-fiscalia/ https://24-horas.mx/image-gallery/acusa-adan-augusto-negocitos-en-senado-durante-dominio-de-monreal/.</p> <p>Folio 330024625000404 Fecha de notificación de prórroga 18/03/2025 Requiero conocer el contenido íntegro de todas las denuncias que haya presentado ante cualquier autoridad algún titular o miembro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, en contra de la administración de la LXV legislatura del Senado de la República por irregularidades o actos de corrupción en contratos públicos; particularmente dos: uno por la administración de archivos del Senado por parte de la empresa Full Services de México, y otro por la instalación de elevadores en el Senado por parte de la empresa Grupo PIASA, ambos celebrados durante la anterior legislatura, cuando Ricardo Monreal era presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. La petición que en este momento realizo, apela a los señalamientos por parte del actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, contra el actual coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, mismos que se realizaron el 13 de diciembre de 2024, tal como lo recoge la siguiente nota periodística: https://24-horas.mx/image-gallery/acusa-adan-augusto-negocitos-en-senado-durante-dominio-de-monreal/. Esta solicitud de información también se da en consecuencia a las declaraciones posteriores de Adán Augusto López del 4 de febrero de 2025, donde invita a un reportero a revisar la existencia de estas denuncias en las instancias correspondientes, tal como lo informa la siguiente nota periodística: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/adan-augusto-se-rehusa-a-aclarar-si-hizo-denuncias-contramonreal-pide-a-periodistas-investigar-en-la-fiscalia/. Como parte de esta solicitud se recuerda que, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia, no se podrá invocar la reserva de información cuando los hechos registrados tengan relación con presuntos actos de corrupción.</p> <p>https://www.eluniversal.com.mx/nacion/adan-augusto-se-rehusa-a-aclarar-si-hizo-denuncias-contramonreal-pide-a-periodistas-investigar-en-la-fiscalia/ https://24-horas.mx/image-gallery/acusa-adan-augusto-negocitos-en-senado-durante-dominio-de-monreal/.</p>	<p>Solicitada por análisis en la UETAG</p>
<p>Folio 330024625000405 Fecha de notificación de prórroga 18/03/2025 Requiero conocer el contenido íntegro de todas las denuncias que haya presentado ante cualquier autoridad algún titular o miembro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, en contra de la administración de la LXV legislatura del Senado de la República por irregularidades o actos</p>	<p>Solicitada por análisis en la UETAG</p>



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>de corrupción en contratos públicos. La petición que en este momento realizo, apela a los señalamientos por parte del actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, contra el actual coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, mismos que se realizaron el 13 de diciembre de 2024, tal como lo recoge la siguiente nota periodística: https://24-horas.mx/image-gallery/acusa-adan-augusto-negocitos-en-senado-durante-dominio-de-monreal/. Esta solicitud de información también se da en consecuencia a las declaraciones posteriores de Adán Augusto López del 4 de febrero de 2025, donde invita a un reportero a revisar la existencia de estas denuncias en las instancias correspondientes, tal como lo informa la siguiente nota periodística: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/adan-augusto-se-rehusa-a-aclarar-si-hizo-denuncias-contramonreal-pide-a-periodistas-investigar-en-la-fiscalia/. Como parte de esta solicitud se recuerda que, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley Federal de Transparencia, no se podrá invocar la reserva de información cuando los hechos registrados tengan relación con presuntos actos de corrupción.</p> <p>https://www.eluniversal.com.mx/nacion/adan-augusto-se-rehusa-a-aclarar-si-hizo-denuncias-contramonreal-pide-a-periodistas-investigar-en-la-fiscalia/ https://24-horas.mx/image-gallery/acusa-adan-augusto-negocitos-en-senado-durante-dominio-de-monreal/.</p>	
<p>Folio 330024625000411 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Hola soy la alumna Lizethe Areli Palacios Rodríguez de la facultad de derecho de la universidad autónoma del estado de México, quisiera hacerles una pregunta ya que es un tema que estamos viendo en la materia de proceso penal, la pregunta es ¿Desde cuándo ya laboran como Fiscalía y no como procuraduría? Y cuánto tiempo llevan con esa modalidad Y si aún son propcuraduria cuando empezaran a laborar como fiscalia? Les mando un cordial saludo y espero puedan responderme, espero su respuesta por duplicado comprensión y atención gracias.</p>	Solicitada por análisis en la UETAG
<p>Folio 330024625000412 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Solicito el numero de descesos atendidas derivado del consumo de fentanilo, del 1 de enero de 2020 al 18 de febrero de 2025, desglosado por municipio en que se registró el caso.</p> <p>Solicito el numero de decesos atendidas derivado del consumo de fentanilo, del 1 de enero de 2020 al 18 de febrero de 2025, desglosado por municipio en que se registró el caso.</p>	Solicitada por análisis en la UETAG
<p>Folio 330024625000414 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Soy estudiante de la Licenciatura en Derecho en la UAEMéx, y requiero esta información para una tarea de la materia</p>	Solicitada por análisis en la UETAG



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>de Proceso Penal, para saber mas a cerca de como funciona su institución</p> <p>A partir de que fecha funcionan como Fiscalía de Justicia, y aproximadamente cuantos asuntos reciben a la semana.</p> <p>Folio 330024625000416 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Por este medio se solicita el acceso a la siguiente información. De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Cuántas sentencias condenatorias se han emitido por el delito de desaparición forzada? Señalar cuál es el sexo del victimario, relación con la víctima, si este pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada o era un servidor público. Respecto de la víctima favor de desglosar por sexo, edad y estado de la República donde se cometió el delito. De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Cuántas sentencias condenatorias se han emitido por el delito de desaparición cometida por particulares? Señalar cuál es el sexo del victimario, relación con la víctima, si este pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada o era un servidor público. Respecto de la víctima favor de desglosar por sexo, edad y estado de la República donde se cometió el delito. De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Indicar cuál es el presupuesto público asignado al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar cuál es el presupuesto público asignado a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas para investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar qué protocolos existen para la realización de exhumaciones en cementerios y fosas clandestinas? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar cuáles y cuántas medidas se han adoptado para reconocer la labor de las personas (madres, padres, familiares) buscadores de su familiar desaparecido? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Cuáles medidas se han adoptado para investigar y sancionar las desapariciones forzadas en el país? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar cuál es el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar cuál es el presupuesto asignado a cada una de las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar si ha sido creado el Banco Nacional de Datos Forenses y cuál es el presupuesto asignado para el mismo? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar si el Consejo Nacional Ciudadano tiene la función de reforzar las investigaciones e incrementar la rendición de cuentas por los delitos graves y las violaciones graves de los derechos humanos, en particular los cometidos por agentes públicos? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar qué mecanismos o acciones han sido implementadas para garantizar la participación de los familiares de las personas desaparecidas en las investigaciones por parte de la</p>	<p>Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable</p>



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>FGR? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar qué mecanismos o acciones han sido implementadas para garantizar la participación de los familiares de las personas desaparecidas en las acciones de búsqueda promovidas por la CNB y las Comisiones Estatales de Búsqueda? De noviembre de 2018 a la fecha, ¿Señalar qué medidas se han implementado para aplicar el enfoque de género e interseccional en las acciones de búsqueda e investigación de las desapariciones de mujeres, niñas, personas LGBTTTIQ+? De noviembre de 2018 a la fecha de consulta ¿Cuántas personas se han reportado como desaparecidas en la República mexicana? Respecto de la víctima favor de desglosar por sexo, edad y estado de la República en donde ocurrió la desaparición. De noviembre de 2018 a la fecha de consulta ¿Cuál es el estado de la República con mayor incidencia de desapariciones? Respecto del estado, favor de desglosar la cantidad de personas desaparecidas por sexo y edad.</p>	
<p>Folio 330024625000417 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Solicito conocer toda queja o denuncia que haya sido presentada contra la empresa Big Force Academy, Academia de Capacitación Agrícola Mexicana. Solicito conocer por año en que se recibió la queja o denuncia, municipio, estado, nomenclatura del expediente y estatus del mismo. Del periodo comprendido de 2022 a la fecha de la presente solicitud.</p>	Solicitada por análisis en la UETAG
<p>Folio 330024625000418 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Solicito la siguiente información sobre las denuncias, actas circunstanciadas, averiguaciones previas, carpetas de investigación y/o cualquier acto de investigación o conocimiento de la comisión de delito relacionados con el delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; así como los delitos vinculados que ha recibido, conocido y/o iniciado esta Fiscalía del 1 de enero de 2018 a la fecha:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Número de averiguación previa, carpeta de investigación o expediente.2. Fecha (día, mes y año) en la que se cometieron los presuntos actos.3. Fecha (día, mes y año) en la que se tuvo conocimiento de los hechos denunciados.4. Autoridad señalada como presunta responsable, es decir, a qué institución pertenecía o laboraba, si es el caso.5. Estado y municipio en el que presuntamente ocurrieron los hechos.6. Número de víctimas por cada una de las denuncias, noticias de hechos, reportes de hechos, actas circunstanciadas, averiguaciones previas, carpetas de investigación y/o cualquier acto de investigación o equivalente.7. Número de personas señaladas como presuntas responsables de cada una de las denuncias, noticias de hechos, reportes de	Solicitada por análisis en la UETAG



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
hechos, actas circunstanciadas, averiguaciones previas, carpetas de investigación y/o cualquier acto de investigación 8. Delito que se está investigando o bajo el cual se inició la averiguación previa o carpeta de investigación. 9. Estatus actual de cada una de las investigaciones de acuerdo con la normativa aplicable en la materia vigente al momento de las denuncias, noticias de hechos, reportes de hechos, actas circunstanciadas, averiguaciones previas, carpetas de investigación y/o cualquier acto de investigación o equivalente	
Folio 330024625000419 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Solicito un informe sobre el número de drones que han sido puestos a disposición de la autoridad ministerial o que están sujetos a investigación por su posible vinculación con delitos como robo en sus distintas modalidades, secuestro, homicidio, venta o distribución de drogas y vuelos en zonas restringidas. El reporte deberá presentarse de manera general y desglosado por entidad de la república o municipio (según sea el caso) en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 15 de febrero de 2025, con información detallada por mes, año, Estado/ Municipio y/o alcaldía/ y tipo de dron (modelo). Asimismo, solicito conocer: ¿Cuántos drones han sido reintegrados a sus respectivos dueños hasta la fecha? ¿Cuántos han sido destruidos? ¿Cuántos siguen bajo resguardo del Ministerio Público? ¿Se registraron personas detenidas en relación con estos casos?	Solicitada por análisis en la UETAG
Folio 330024625000420 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Por medio de la presente solicitud, requiero en versión pública la bitácora de los vuelos helicópteros que aterrizaron en las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República, ubicadas en Parque Nacional de Justicia, Santa FE. Quisiera saber el nombre de todas las personas que fueron trasladadas en cada uno de estos vuelos. Quisiera saber el sitio de procedencia de cada uno de estos vuelos. Quisiera saber la fecha de cada uno de estos vuelos, en caso de que consideren que existe información clasificada como reservada, requiero la versión publica de dichas documentales; cabe mencionar que la información solicitada es referente a un servidor público y ah vehículos y gastos erogados por el estado, motivo por el cual no puede existir negativa para proporcionar lo requerido.	Solicitada por análisis en la UETAG
Favor de proporcionar los datos solicitados en el documento adjunto En Impunidad Cero nos encontramos en la construcción de un nuevo índice sobre el funcionamiento e independencia de las fiscalías locales durante el periodo de 2024, por ello que solicitamos la siguiente información: 1. ¿La fiscalía ha adoptado un modelo de gestión para eficientar las carga trabajo? De ser así, favor de anexar copia digital del programa de modelo de gestión vigente durante 2024	Solicitada por análisis en la UETAG



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>2. ¿La fiscalía ha realizado una evaluación del modelo de gestión? De ser así, fav de adjuntar copia digital de los últimos dos reportes de evaluación.</p> <p>3. ¿La fiscalía cuenta con un modelo de investigación para guiar las diligencias coordinación entre ministerios públicos, policías de investigación y personal pericial? De ser así, anexar copia digital del modelo de investigación vigente durante 2024</p> <p>4. ¿La fiscalía ha realizado una evaluación de la implementación del modelo investigación descrito en la pregunta anterior? De ser así, favor de adjuntar copia digital de los últimos dos reportes de evaluación.</p> <p>5. ¿La fiscalía cuenta con un plan de persecución penal que defina con claridad delitos de atención prioritaria en el estado? De ser así, favor de anexar copia digital del plan de persecución penal vigente durante 2024</p> <p>6. ¿Los delitos de atención prioritaria definidos en el plan de persecución pen fueron definidos a partir de un diagnóstico estatal? De ser así, favor de adjunt copia digital del diagnóstico en cuestión.</p> <p>7. ¿La fiscalía cuenta con un proceso para realizar evaluación del control confianza, de competencia, y del desempeño de los servidores públicos? De s así, favor de adjuntar copia digital de los lineamientos vigentes durante 2024</p> <p>8. Número de ministerios públicos evaluados y acreditados en control de confianza durante 202</p> <p>9. Número de policías de investigación evaluados y acreditados en control de confianza durante 202</p> <p>10. Número de peritos evaluados y acreditados en control de confianza duran 2024.</p> <p>11. Número de ministerios públicos evaluados y acreditados en evaluación de competencia durante 2024.</p> <p>12. Número de policías de investigación evaluados y acreditados en evaluación de competencia durante 2024.</p> <p>13. Número de peritos evaluados y acreditados en evaluación de competencia durante 2024.</p> <p>14. Número de ministerios públicos evaluados y acreditados en evaluación de desempeño durante 2024.</p> <p>15. Número de policías de investigación evaluados y acreditados en evaluación de desempeño durante 2024.</p> <p>16. Número de peritos evaluados y acreditados en evaluación de desempeño durante 2024.</p> <p>17. ¿Durante 2024 cuál fue el número de servidores públicos que contaron con la certificación otorgada luego de aprobar favorablemente la evaluación del contr de confianza, de competencia y de desempeño</p> <p>18. ¿Tienen bases de datos existentes sobre las sanciones aplicadas? En caso de que si, anexar una copia de la base de datos</p>	



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
que registran las sanciones aplicadas durante 2024	
19. Anexar copia digital del presupuesto basado en resultados de la institución para el año 2024	
20. Anexar copia digital del programa operativo anual de la institución para el año 2024	
21. Anexar copia digital los lineamientos vigentes durante 2024 que regulan los procedimientos para la promoción de ministerios públicos, policías de investigación, personal pericial	
22. Evidencia que permita comprobar que durante el 2024 se realizaron convocatorias para la promoción de grados de policías de investigación	
23. ¿Se realizan convocatorias de reclutamiento específicamente para mujere	
24. Evidencia que permita comprobar que durante el 2024 se realizaron convocatorias para la promoción de grados de ministerio público	
25. Evidencia que permita comprobar que durante el 2024 se realizaron convocatorias para la promoción de grados de personal pericial	
26. Anexar los resultados (calificaciones) de las evaluaciones de conocimientos pa la promoción general de grados 2024 que recibieron los policías de investigación.	
27. Anexar los resultados (calificaciones) de las evaluaciones de conocimientos pa la promoción general de grados 2024 que recibieron los ministerios públicos.	
28. Anexar los resultados (calificaciones) de las evaluaciones de conocimientos pa la promoción general de grados 2024 que recibieron los peritos.	
29. Anexar copia digital del programa de formación inicial vigente durante 2024 para agentes del ministerio público	
30. Anexar copia digital del programa de formación inicial vigente durante 2024 para policías de investigación	
31. Anexar copia digital del programa de formación inicial vigente durante 2024 para personal pericial	
32. Número de personas que recibieron, concluyeron y aprobaron el curso de formación inicial para ministerio público durante 2024	
33. Número de personas que recibieron, concluyeron y aprobaron el curso de formación inicial para policia de investigación durante 2024	
34. Número de personas que recibieron, concluyeron y aprobaron el curso de formación inicial para perito durante 2024	
35. Número de personas que recibieron, concluyeron y aprobaron el curso de Curso Taller de actualización para ministerios públicos durante 2024	
36. Número de personas que recibieron, concluyeron y aprobaron el curso de Curso Taller de actualización para perito durante 2024	



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
37. Número de personas que recibieron, concluyeron y aprobaron el curso de Curso Taller de actualización para policía de investigación durante 2024	
38. Número total de elementos de la institución a que recibieron capacitación en perspectiva de género durante 2024	
39. Número total de capacitaciones impartidas en 2024 al personal de la institución y su duración en horas	
40. Número total de ministerios públicos que cursaron programas académicos y formativos durante 2024	
41. Número de ministerios públicos que cursaron programas académicos y formativos, por etapa de formación durante 2024	
42. Número total de peritos que cursaron programas académicos y formativos durante 2024	
43. Número de peritos que cursaron programas académicos y formativos, por etapa de formación durante 2024	
44. Número total de policías de investigación que cursaron programas académicos y formativos durante 2024	
45. Número de policías de investigación que cursaron programas académicos y formativos, por etapa de formación (es decir, distinguiendo entre formación inicial, actualización, y formación continua actualizada) durante 2024	
46. Número total de ministerios públicos que ejercieron el cargo durante 2024, por género, función (administrativos y operativos) y jerarquía	
47. Número total de policías de investigación que ejercieron el cargo durante 2024, por género, función (administrativos y operativos) y jerarquía	
48. Número total de peritos que ejercieron el cargo durante 2024, por género, función (administrativos y operativos) y jerarquía	
49. ¿Durante 2024 la Fiscalía/Procuraduría contó con un instituto de formación y capacitación, o con una coordinación de profesionalización continua?	
50. Número total de personas que fue capaz de atender el instituto de formación y capacitación durante 2024	
51. Anexar copia digital del estudio realizado para conocer las necesidades de capacitación de la institución en 2024	
52. Anexar copia digital de la estrategia o programa general de formación de la institución para 2024	
53. Presupuesto programado y ejercido para cumplir con las etapas de profesionalización en 2024	
54. Anexar copia digital del manual de tiro policial vigente durante 2024	
55. Número de prácticas de tiro a las que acudieron cada policías de investigación durante 2024.	
56. Número total de cartuchos empleados para prácticas de tiro durante 2024.	
57. Número de ministerios públicos con acceso a seguro médico	



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
durante 2024 58. Número de peritos con acceso a seguro médico durante 2024 59. Número de policías de investigación con acceso a seguro médico durante 2024 60. ¿Durante 2024 la institución contó con salas de lactancia? 61. ¿Durante 2024 la institución contó con guarderías? 62. Durante 2024 la institución contó registros detallados sobre el objetivo principal del proceso de certificación para Agentes de Ministerio Público, Policías investigación y Peritos en su proceso de profesionalización. 63. Durante 2024 la institución contó con registros sobre las metas específicas cada fase del proceso de certificación de Agentes de Ministerio Público, Policía de investigación y Peritos. 64. Durante 2024 la institución contó con registros sobre los indicadores de evaluación de conocimientos y habilidades, así como los plazos definidos para cumplir con cada etapa. 65. Durante 2024 la institución implementó estrategias para implementar y evaluar el proceso de certificación de los Agentes de Ministerio Público, Policías investigación y Peritos. 66. Durante 2024 la institución contó con información sobre cómo se estructuran las fases del curso de preparación y la evaluación de habilidades, y cómo estas contribuyen al desarrollo de competencias de Agentes de Ministerio Público, Policías de investigación y Peritos 67. Durante 2024 la institución contó con información sobre las líneas de acción específicas para asegurar el proceso de certificación para Agentes de Ministerio Público, Policías de investigación y Peritos. 68. ¿Durante 2024 la Fiscalía o Procuraduría General de Justicia del estado contó con una Unidad Especializada para la Investigación de delitos cometidos contra poblaciones LGBTQ+? 69. ¿Durante 2024 la Fiscalía o Procuraduría General de Justicia del estado contó con una Unidad Especializada para la Investigación de delitos cometidos contra personas con discapacidad? 70. ¿Durante 2024 la Fiscalía o Procuraduría General de Justicia del estado contó con una Unidad Especializada para la Investigación de delitos cometidos contra infancias y adolescencias? 71. Proporcionar los protocolos y/o modelos de investigación de delitos cometidos contra poblaciones LGBTQ+ vigentes durante 2024 72. Proporcionar los protocolos y/o modelos de investigación de delitos cometidos contra infancias y adolescencias vigentes durante 2024	



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
73. Proporcionar los protocolos y/o modelos de investigación de delitos cometidos contra personas con discapacidad vigentes durante 2024 74. ¿Durante 2024 la institución encargada de la procuración de justicia ya había completado su transición a fiscalí 75. Número de días de vacaciones otorgados en el marco normativo vigente durante 2024 76. El marco normativo vigente en 2024 contempla la obligación de otorgar aguinaldo 77. El marco normativo vigente durante 2024 contempla la obligatoriedad de otorgar licencias de maternidad y paternidad 78. El marco normativo vigente en 2024 contempla igualdad de condiciones para las licencias de maternidad y paternidad En la manera de lo posible, solicito que esta información sea proporcionada en una base de datos en formato abierto tal como lo señalan los artículos 3. 24 fracción V y 57 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales señalan que se privilegiará la entrega en formato abierto	
Folio 330024625000423 Fecha de notificación de prórroga 19/03/2025 Solicitud de información pública sobre personas sentenciadas y procesadas por delitos contra la salud relacionados con fentanilo Por medio de la presente, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, conforme a lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito solicitar la siguiente información: 1. El número total de personas sentenciadas por delitos contra la salud en los que se haya determinado la presencia de fentanilo como sustancia ilícita en el periodo a la fecha, así como el desglose de las mismas por entidad federativa. 2. El número total de personas procesadas por delitos relacionados con fentanilo, incluyendo aquellas que aún se encuentran en proceso, indicando el mismo desglose por entidad federativa. 3. Información sobre la nacionalidad de las personas sentenciadas o procesadas, especificando si son mexicanas o extranjeras. En caso de ser extranjeras, se solicita el desglose de nacionalidades, conforme a los datos disponibles.	Solicitada por análisis en la UETAG
Folio 330024625000424 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 Solicito una relación de los presuntos infractores que han sido detenidos por los referidos "delitos de alto impacto" cometidos en territorio nacional del 1 de octubre de 2024 y hasta la fecha de la presente solicitud. Solicito que la información sea	Solicitada por análisis en la UETAG



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
desglosada por fecha de la detención (día, mes y año), entidad federativa, municipio, número de presuntos infractores detenidos, motivo de la detención (si fueron detenidos en flagrancia, por acciones de investigación o algún otro motivo), tipo del delito específico y modalidad del delito por el que fueron detenidos, edad, sexo y nacionalidad. De igual forma solicito me sea informado el órgano jurisdiccional (Centro de Justicia Penal Federal) al que fueron remitidos, desagregando la información por estado, municipio, centro de justicia y nombre del penal en el que actualmente se encuentran, así como bajo qué modalidad de prisión se encuentran en la cárcel (prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada). Realizo esta solicitud de información con base en lo dicho en la conferencia de prensa del 11 de febrero de 2025 en Palacio Nacional, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que 1 de octubre de 2024 al 9 de febrero de 2025, elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, personal militar, naval, de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de la República, entre otros, detuvieron a "11 mil 600 personas por delitos de alto impacto".	
Folio 330024625000426 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 ¿Cuántos No. De casos de trata de personas tuvieron en 2023 y 2024? ¿Cuáles fueron el número de víctimas hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes? ¿Cuántas carpetas de investigación tuvieron en 2023 y 2024? Y ¿Cuántas carpetas judicializadas?	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000427 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 Número total y listado de los nombres de los servidores públicos que se jubilaron en 2023 y 2024 de su dependencia, indicar fecha de jubilación y años de servicio, de igual forma indicar si tuvieron una liquidación y el rango de dinero que recibieron.	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000428 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 1. Número de denuncias interpuestas por personas extranjeras en situación migratoria irregular que manifestaron haber sido víctimas de delito en territorio mexicano, según tipo de delito y sexo, enero- diciembre de 2024. 2. Número de denuncias interpuestas por personas extranjeras en proceso migratorio que manifestaron haber sido víctimas de delito en territorio mexicano, según tipo de delito y sexo, enero- diciembre de 2024. 3. A qué instancias les proporcionan referencias necesarias sobre el número de averiguaciones previas, carpetas de investigación y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes. 4. Número de denuncias interpuestas por personas en situación de desplazamiento forzado interno que manifestaron haber sido	Solicitada por análisis en la UETAG



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
víctimas de delito en territorio mexicano, según tipo de delito y sexo, enero- diciembre de 2024.	
Folio 330024625000429 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 Solicito relación de carpetas de investigación iniciadas por el delito de robo en carreteras en el país del primero de enero de 2023 a la fecha en que se recibe la presente solicitud desglosado por año y por entidad federativa.	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000430 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 Descripción de la solicitud: Deseo conocer estadísticas en casos de: denuncias de violencia intrafamiliar/domestica, defunciones de mujeres embarazadas (a mano de una pareja u otro) defunciones en casos de feminicidio en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2024. Datos complementarios: Defunciones de mujeres embarazadas Denuncias de violencia intrafamiliar	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000431 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 Quisiera conocer, cual es salario del Fiscal General de la Republica el licenciado Alejandro Gertz Manero, precisando el monto erogado por cada una de las prestaciones que recibe.	Solicitada por análisis en la UETAG
Folio 330024625000434 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 En 2022, 2023, 2024 y lo que va de 2025 ¿Cuánto fentanilo se ha decomisado en Jalisco? Favor de informar en dónde fueron los decomisos, con fecha y autoridad que lo aseguró. Agregar si hubo personas detenidas. De otros tipos de droga decomisadas en Jalisco, cuánta se ha detectado que tiene fentanilo? Favor de especificar qué tipo de droga es, cuándo y dónde fue decomisada.	Solicitada por análisis en la UETAG
Folio 330024625000435 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 Solicito información desglosada por estado y por año, desde 1995 hasta la fecha, sobre: (1) decomisos de droga realizados por autoridades federales, (2) número de homicidios relacionados con el crimen organizado, (3) número de arrestos por crimen organizado, (4) cantidad de becas educativas otorgadas por cada gobierno federal y estatal, y (5) monto de apoyos sociales per cápita en cada entidad. Agradecería que los datos incluyeran la fuente específica y, de ser posible, se proporcionaran en formato de base de datos (CSV, Excel, o similar).	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000437 Fecha de notificación de prórroga 20/03/2025 Se solicita que informe lo siguiente: 1.-El número de Averiguaciones Previas iniciadas por el delito de despojo de 2013 a la fecha (proporcione los números de cada año). 2.- El número de Carpetas de Investigación iniciadas por el delito de despojo de 2013 a la fecha (proporcione los números de cada	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>año).</p> <p>3.- El número de Averiguaciones Previas iniciadas por el delito de despojo cuya resolución fue prescripción de la pretensión punitiva, de 2013 a la fecha. (proporcionando números por cada año).</p> <p>4.- El número de Carpetas de Investigación iniciadas por el delito de despojo cuya resolución fue prescripción de la pretensión punitiva, de 2013 a la fecha (proporcionando números por cada año).</p> <p>Folio 330024625000438 Fecha de notificación de prórroga 21/03/2025 En fecha 13 de agosto de 2024 hubo un siniestro donde se vio involucrada una camioneta Toyota avanza 2018 con placas T28BKK perteneciente al activista Gustavo Aquino, después de luchar contra la corrupción para obtener el oficio de liberación y mediante amparo se obtuvieron dichos documentos; siendo embargo el concesionario Gruas Mejía Sa de cv a pesar de entregar la documentación y realizar un indebido pago, se niega a devolver el vehículo diciendo que el trato lo realiza con la aaseguradora. Ahora bien, pretendo iniciar una RPE, por tal motivo necesito saber en el área de su competencia lo siguiente. Además de que se me obligó a firmar un documento en el que supuestamente recibía la camioneta, eso es falso aunado a que le robaron autopartes, pero las personas de ahí dicen que tienen en su nómina a ministerios públicos lo que crea incertidumbre.</p> <p>A. Documento y fecha de la concesión federal para operar como depósito vehicular.</p> <p>B. Documento y fecha de concesión de la entidad federativa de Morelos a través de cualquier órgano de la administración pública, desconcentrado, descentralizado o autónomo.</p> <p>C. Existencia de denuncias por actos ilícitos de dicho concesionario.</p> <p>D. Medio de defensa alguno para el particular que es vitrina de un particular concesionario funciones de autoridad de acuerdo a la ley de amparo.</p>	<p>Solicitada por análisis en la UETAG</p>
<p>Folio 330024625000439 Fecha de notificación de prórroga 21/03/2025 Solicito información sobre cualquier afectación ambiental o social ocasionadas por las operaciones de la empresa Ternium, y sus subsidiarias, en Michoacán, Colima y Jalisco, particularmente de Las Encinas, S.A. de C.V. y Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada.</p>	<p>Solicitada por análisis en la UETAG</p>
<p>Folio 330024625000440 Fecha de notificación de prórroga 21/03/2025 Solicito todos los registros de maderas decomisadas y/o aseguradas que han sido donadas y/o transferidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina durante el periodo 1 de enero del 2020 al 16 de octubre del 2024. De lo anterior, solicito que se desglose la información por 1) Año 2) Tipo de Madera 3) Cantidad de Madera 4) Regimiento o Cuartel al que se le donó o transfirió la madera 5) Entidad y municipio</p>	<p>Solicitada por falta de respuesta de la OM</p>



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Folio 330024625000442 Fecha de notificación de prórroga 21/03/2025 A fin de elaborar un proyecto de resolución para el cual requiero la información, de la manera mas atenta solicito que de no existir inconveniente legal alguno, se remita lo siguiente: "Instructivo del Procurador General de la República relativo al procedimiento para el aseguramiento, custodia, identificación, conteo, pesaje y destrucción de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias nocivas o peligrosas para la salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07-IX-1994." Lo anterior es así, pues de las publicaciones realizadas en el diario oficial de la federación en la referida fecha, no se advierte que la información solicitada se encuentre publicada.	Solicitada por análisis en la UETAG
Folio 330024625000443 Fecha de notificación de prórroga 21/03/2025 De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley general de transparencia y acceso a la información, solicito: 1.Desde el 1 de octubre de 2024 al 20 de febrero de 2025, a cuántas reuniones ha sido convocada la persona titular de esta dependencia federal por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, desglosado por fecha y motivo 2.Desde el 1 de octubre de 2024 al 20 de febrero de 2025, a cuántas reuniones ha sido convocada la persona titular de esta dependencia federal por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum a otras entidades del país, desglosado por fecha, lugar de la reunión y motivo del encuentro 3.Desde el 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, a cuántas reuniones fue convocada la persona titular de esta dependencia federal por parte del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, desglosado por fecha y motivo 4.Desde el 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, a cuántas reuniones fue convocada la persona titular de esta dependencia federal por parte del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador a otras entidades del país, desglosado por fecha, lugar de la reunión y motivo del encuentro	Solicitada por análisis en la UETAG
Folio 330024625000444 Fecha de notificación de prórroga 21/03/2025 Solicito me informe TODOS los registros de personas extraviadas, no localizadas y desaparecidas en Baja California durante el periodo que abarca el 01 de diciembre de 1999 hasta el día en el que fue ingresada esta solicitud, 20 de febrero de 2025, por información obrante en sus registros así como por información compartida fruto de la cooperación interinstitucional de otras instituciones con ustedes, agrupando los datos de la siguiente manera: a) El número de personas extraviadas, no localizadas y desaparecidas en su entidad (del fuero común, y de ser posible, del fuero federal) indicando la fecha de reporte, fecha en que fue vista por última vez cada una de las personas, su sexo, su edad, su	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>ocupación laboral, su nivel de escolaridad y el municipio en que fue vista por última vez,</p> <p>b) El número de casos de desaparición desglosando cómo fue registrado el caso (desaparición forzada, desaparición por particulares, por ausencia, por extravío), por quien fue cometida, su sexo, su edad, su ocupación laboral, su nivel de escolaridad y el municipio en donde ocurrió el hecho.</p> <p>c) El total de personas registradas como no localizadas y desaparecidas y que ya fueron localizadas (del fuero común y, de ser posible, del fuero federal), indicando si fueron halladas con vida o sin vida, así como su sexo, edad, ocupación laboral, nivel de escolaridad y el municipio donde fueron halladas.</p> <p>d) El número de averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas, sentencias por desaparición forzada y los datos disponibles acerca de las mismas (en Baja California).</p> <p>e) El número de averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas y sentencias por desaparición cometida por particulares y los datos disponibles acerca de las mismas (en Baja California)</p> <p>e) El número de averiguaciones previas de desaparición forzada o cometida por particulares que estén relacionadas con narcomenudeo, narcotráfico, trata de personas y tráfico de personas.</p> <p>F) el número de carpetas de investigación o actas circunstanciadas de desaparición forzada que estén relacionadas con narcomenudeo, narcotráfico, trata de personas y tráfico de personas.</p> <p>g) el número de sentencias por desaparición forzada o cometida por particulares que estén relacionadas con narcomenudeo, narcotráfico, trata de personas y tráfico de personas.</p> <p>f) El número de casas o inmuebles asegurados por estar relacionados con desaparición o fosas clandestinas (en Baja California), el municipio y la colonia donde se ubican.</p> <p>Folio 330024625000445 Fecha de notificación de prórroga 21/03/2025 Por medio de la presente solicito conocer el número de convenios firmados entre el el 1 de marzo de 2018 y el 14 de febrero de 2025 con otras instituciones en materia forense de identificación y de resguardo de cuerpos. Desglosar la información por: - nombre de la institución - materia del convenio: identificación o resguardo - año en que se firmó el convenio - número de cuerpos que se resguardaron o identificaron en el marco de ese convenio. - solicito copia de los convenios firmado</p> <p>Folio 330024625000447 Fecha de notificación de prórroga 24/03/2025 Solicito información desglosada por estado y por año, desde 1995 hasta la fecha, sobre:</p> <p>(1) decomisos de droga realizados por autoridades federales,</p>	<p>Solicitada por análisis en la UETAG</p> <p>Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable</p>



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
(2) número de homicidios relacionados con el crimen organizado, (3) número de arrestos por crimen organizado, (4) cantidad de becas educativas otorgadas por el gobierno federal y estatal, y (5) monto de apoyos sociales per cápita en cada entidad. Agradecería que los datos incluyeran la fuente específica y, de ser posible, se proporcionaran en formato de base de datos (CSV, Excel, o similar).	
Folio 330024625000448 Fecha de notificación de prórroga 24/03/2025 Solicito saber cuantas carpetas de investigación ha abierto la FGR por posibles delitos de tráfico de combustible en el estado de Sonora durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024. Detalle por favor los municipios y mencione si hubo personas detenidas	Solicitada por falta de respuesta de la OM
Folio 330024625000450 Fecha de notificación de prórroga 24/03/2025 1.- ¿La Fiscalía ha realizado una evaluación del modelo de atención a la ciudadanía? De ser así, favor de adjuntar copia digital de los últimos dos reportes de evaluación. 2.- Informe si la institución cuenta con evaluaciones sobre el personal que incluyen preguntas sobre discriminación o violencia. 3.- ¿La unidad administrativa o área encargada de proveer servicios periciales y/o servicio médico forense en el Estado cuenta con criterios para la evaluación del desempeño del personal que la integra? (Sí o No). Favor de proporcionar documentación al respecto o, en su defecto, proporcionar una descripción lo más exhaustiva que sea posible. 4.- ¿La Fiscalía ha adoptado un modelo de gestión para eficientar las cargas de trabajo? De ser así, favor de anexar copia digital del Programa de Modelo de Gestión vigente durante 2024. 5.- ¿La Fiscalía ha realizado una evaluación del modelo de gestión? De ser así, favor de adjuntar copia digital de los últimos dos reportes de evaluación.	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000456 Fecha de notificación de prórroga 24/03/2025 1.- ¿La institución cuenta con cédulas de trabajo (formatos de evaluación del desempeño de las áreas responsables de dar cumplimiento a las metas y objetivos de la institución)? De ser así, favor de adjuntar copia digital de las últimas dos evaluaciones.	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000457 Fecha de notificación de prórroga 24/03/2025 DIRECTORIO ACTUALIZADO QUE CONTENGA LOS NOMBRES, CARGOS Y NUMEROS DE EXTENSIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITOS A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN	Solicitada por falta de respuesta de la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024625000451 Fecha de notificación de prórroga 24/03/2025 Quiero saber, ¿Cuáles son las ofertas laborales vigentes a la fecha de la presente solicitud, que tenga como perfil	Solicitada por análisis en la UETAG



DETALLE DE SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
de estudio la carrera de Derecho? ya sea eventual o de plaza, ¿Cuál es la forma o medio que implementan para darle publicidad a las ofertas laborales? y ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Folio 330024625000464 Fecha de notificación de prórroga 25/03/2025 ME PERMITO INFORMARLE QUE SE AMPLÍA EL TÉRMINO DE LA CONTESTACIÓN A SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EN VIRTUD DE QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA INFORMACION, SE ENCUENTRAN REALIZANDO UNA BUSQUEDA MINUCIOSA Y EXHAUSTIVA EN SUS ARCHIVOS DE TRÁMITE Y CONCENTRACION.	Solicitada por análisis en la UETAG



E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:

E.1. Folio de la solicitud 330024624002965 – RRA 620/25

La resolución para cada uno de los asuntos enlistados en el presente rubro se encuentra al final de la presente acta, signadas por los miembros del Comité.

Área con líneas de puntos para resoluciones.



IV. Asuntos Generales.

PUNTO 1.

- **Mensaje de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.**

La Titular de la UETAG reiteró a los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas que integran la estructura orgánica de esta Fiscalía General de la República que, la información que se proporciona como respuesta a las solicitudes de información, es responsabilidad exclusiva de los titulares de cada unidad administrativa; por lo que, cuando sus pronunciamientos así lo ameriten, deberán remitir además, la aclaración o precisión que justifique cualquier cuestionamiento mediático a la institución.



Tomando la votación de cada uno de los integrantes del Colegiado de Transparencia para cada uno de los asuntos de conformidad con lo que se plasmó en la presente acta, se da por terminada la Décima Sesión Ordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera,

Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.



Lic. Carlos Guerrero Ruiz

Miembro suplente del Titular de la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria, representante del área coordinadora de archivos



L. C. Sergio Agustín Taboada Cortina

Miembro suplente del Titular del Órgano Interno de Control



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Administrador Especializado de Acceso a la Información
Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



FGR

**FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DÉCIMA SESIÓN
ORDINARIA 2025
18 DE MARZO DE 2025**



E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:

E.1. Folio de la solicitud 330024624002965 – RRA 620/25

Síntesis:	Estadística de armas con nivel de desglose
Sentido de la resolución CT:	Confirma
Rubro:	Inexistencia

Solicitud:

"Solicito conocer: 1- El total de armas de fuego y explosivos asegurados al crimen organizado en Sinaloa a partir del 9 de septiembre de 2024 y hasta la fecha de esta solicitud. Que la información sea entregada desglosada y con el mayor detalle posible: tipo de arma, fecha de aseguramiento, lugar, marca, procedencia de fabricación, costo" (Sic)

Gestión de la solicitud:

Informó que se turnó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a fin de que requiriera información al Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC), quien indicó que **no cuenta con información con el nivel de desglose que permita identificar lo específicamente solicitado**; es decir, del total de armas de fuego y explosivos asegurados en Sinaloa, aquellos asegurados "al crimen organizado".

Mediante **recurso de revisión**, el particular se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), alegando que:

El sujeto obligado reconoce en la misma respuesta que conoce de esa información, sin embargo, es notorio su desinterés para hacer válida la máxima publicidad. Solicito que el INAI revise el caso y, si lo considera procedente, obligue al organismo autónomo a entregar la información estadística.

En esa consideración, el INAI tras un análisis al caso, resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. Se **REVOCA** la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo con el considerando CUARTO de la presente resolución.

SEGUNDO. Se **instruye** al sujeto obligado para que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, en los siguientes términos:

a) Realice una **búsqueda en las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a en la Oficialía Mayor y la Agencia de Investigación Criminal** dente relación con el total de armas de fuego y explosivos asegurados al crimen organizado en estado Sinaloa a partir del nueve de septiembre de dos mil veinticuatro y hasta la fecha de esta solicitud, entregando el grado



de desagregación que permitan sus sistemas generar o entregar la información estadística y sin que ello implique la elaboración de documentos ad hoc.

*En caso de que, como resultado de la búsqueda efectuada, en los términos señalados previamente, no se localicen los datos personales, deberá hacerlo constar en una resolución emitida por el Comité de Transparencia, en la que se confirme la **inexistencia** de la misma de manera fundada y motivada, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de la materia, y cuyo contenido deberá ser puesto a disposición del particular, proporcionándole gratuitamente un ejemplar en original de la misma, previa acreditación de la titularidad de los datos personales, conforme a lo establecido por la ley en mención."*

En estricto acato a la instrucción del Órgano garante de la transparencia, se turnó la solicitud, para su atención a las unidades administrativas señaladas en la resolución, mismas que manifestaron:

Por medio de la Unidad de Planeación y Coordinación Interinstitucional (**UPCI**) adscrita a la Oficialía Mayor (**OM**) informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de las bases con las que cuenta, no se tienen los insumos que permita dar atención a la solicitud, esto se debe a que las cifras estadísticas que se tienen corresponden a expedientes iniciados, considerando el delito principal de dicho expediente y no se cuentan con datos relacionados con aseguramientos de ningún tipo.

Por otro lado, la Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final (**URAMYDF**) adscrita a la **OM** indicó no contar con la información sobre el total de armas de fuego y explosivos asegurados al crimen organizado, no obstante, en principio de máxima publicidad proporcionó estadística de aseguramientos de armas cortas y largas en Sinaloa del 9 de septiembre al 31 de octubre de 2024.

Por su parte, la Agencia de Investigación Criminal (**AIC**) después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del Centro Federal de Inteligencia Criminal (**CFIC**), manifestó que **no cuenta con el nivel de desglose que permita identificar lo específicamente solicitado**, es decir, **no se cuenta con una variable que permita identificar las armas aseguradas al crimen organizado y por ende los grados de desagregación requeridos**, ello con fundamento en lo previsto en el **artículo 141** de la LFTAIP.

Por ello, derivado de un análisis a las respuestas de las áreas, se emite la siguiente:

Determinación del Comité de Transparencia:

CT/ACDO/CUMPLIMIENTO/0013/2025:

De conformidad con lo previsto en el artículo 65, fracción II de la **LFTAIP**, este Comité de Transparencia **confirma** la declaratoria de inexistencia de la información, de conformidad con lo establecido en el **artículo 141** de la **LFTAIP**, en concatenación con el **criterio de interpretación del INAI 04/19** que a la letra señala que:

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la



información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Lo anterior, toda vez que la **OM** y **AIC** manifestaron que posterior a efectuar una nueva búsqueda congruente y exhaustiva (**modo**) de la información en la totalidad de sus archivos físicos y electrónicos, bases de datos, libros de gobierno y cualquier otro registro en donde pudiera obrar la información requerida (**lugar**); hasta el tres de marzo del dos mil veinticinco, por ser la fecha de notificación de la resolución del recurso de revisión en cita (**tiempo**), manifestaron no localizar la información requerida con el nivel de desglose requerida, de ahí que resulte procedente declarar la inexistencia.

Por lo expuesto, se **instruye** a la **UETAG** hacer entrega de la presente acta al solicitante a través del medio que eligió para recibir notificaciones, así como, hacerla del conocimiento a las instancias competentes para los efectos a los que haya lugar.

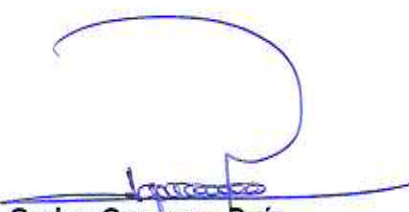


La presente resolución forma parte de la Décima Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.



Lic. Carlos Guerrero Ruíz
Miembro suplente del Titular de la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria, representante del área coordinadora de archivos



Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina.
Suplente del Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

